



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	María Yolanda Álzate Monsalve
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-006-2019-00742-01
TEMA	Decreto de prueba
DECISIÓN	Confirma el auto recurrido

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 084** de discusión de proyectos, dentro del proceso ordinario promovido por **MARÍA YOLANDA ÁLZATE MONSALVE** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-**, con radicado 05-001-31-05-006-2019-00742-01, procede a dictar auto interlocutoria de segunda instancia.

- **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos de la sustitución de poder conferido por el doctor **RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES**, en calidad de apoderado judicial para procesos de **COLPENSIONES** de la firma **RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S.**, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la doctora **VIVIANA MARCELA CALLE VELÁSQUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía 32.255.330 y portadora de la tarjeta profesional 171.298 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de **COLPENSIONES**.

- **AUTO RECURRIDO:**

En audiencia celebrada el 10 de febrero de 2023, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín resolvió no admitir como prueba pericial el dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por la IPS Universitaria y aportado por la demandante.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: Solicita se modifique el auto que negó el decreto de la prueba pericial del dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la IPS Universitaria, toda vez que considera que esta prueba es conducente, pertinente y útil. Señala que tal prueba demuestra un porcentaje y fecha de estructuración y origen frente a un asunto en controversia. Aclaró que la prueba debe ser valorada en la etapa de juzgamiento, por lo que considera apresurado descartar la prueba. Que la misma suerte sigue el llamamiento del perito que rindió el dictamen, persona idónea para aclarar los puntos tratando en este. Añadió que en esta materia no hay prueba solemne.

- **ALEGATOS:**

Colpensiones: *“Solicito respetuosamente Honorable Magistrado, que se tenga presente lo decidido por la señora Juez de primer grado, bajo el entendido de que se trata de una prueba de oficio en tanto lo que se pretende demostrar es la condición de Invalidez al momento del deceso de la causante, de quien peticiona hoy la sustitución pensional, tal y como quedó señalado en la fijación del litigio “Deberá probar la demandante que para el 30/07/2011 tenía ella pérdida de capacidad laboral constitutiva de invalidez; y que dependía económicamente de la señora Bernarda Monsalve Barrientos” (...) Conforme a dicha norma, es claro que, por tratarse de una prueba de oficio decretado por el despacho para determinar la pérdida de capacidad laboral de la señora Alzate Monsalve con fines del debate judicial y no administrativo de un derecho y para que obre dentro del Proceso, y precisamente movido por el interés jurídico de la demandante, no es otra la entidad a realizar el Dictamen, que la Junta Regional de Calificación de Invalidez.”*

CONSIDERACIONES:

El juzgado del conocimiento, Sexto Laboral del Circuito de Medellín, no admitió como prueba pericial el dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado por la IPS Universitaria y aportado por la demandante, así como la comparecencia del doctor José William Vargas Arenas para que ratifique tal dictamen; por su parte, la demandante opone a la decisión de no declarar dicha prueba, al advertir que esta sí es conducente, pertinente y útil.

Conforme con lo anterior, el problema jurídico para resolver se centrará en determinar si es procedente o no el decreto de las pruebas relacionadas con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la IPS Universitaria.

Para resolver el problema planteado se debe partir de que la procedencia de una prueba está determinada por la posibilidad de que su práctica esté admitida legalmente (conducencia), tenga capacidad de lograr el efecto que se espera (pertinencia) y sea útil para el proceso (utilidad).

La demandante pretende la nulidad del dictamen médico laboral emitido por Colpensiones el 9 de abril de 2019, por medio del fue calificada con una pérdida de capacidad laboral 41.61%, fecha de estructuración 4/5/2018, enfermedad común. Asimismo, que cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50 %, con fecha de estructuración 29/10/2004, origen común. Como consecuencia, que se condene a la AFP a reconocerle la sustitución pensional con ocasión de la muerte de su señora madre Bernarda Monsalve Barrientos a partir del 30/7/2011.

Las pretensiones anteriores fueron sustentadas en que la demandante, si bien fue calificada por Colpensiones, posteriormente también fue calificada por la IPS Universitaria, acreditándose con este último dictamen que es considerada persona inválida por superar el 50 % de pérdida de capacidad laboral y que la fecha de estructuración es anterior al momento en que falleció su madre pensionada, de quien dependía económicamente.

El juzgado del conocimiento negó la prueba relacionada con el dictamen emitido por la IPS Universitaria; en su lugar, de manera oficiosa decretó un nuevo dictamen a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Advirtió que la parte actora no respetó el conducto regular para efectos de su calificación, toda vez que contra el dictamen proferido por

Colpensiones no interpuso recurso alguno, pero que de manera particular se realizó uno nuevo en la IPS Universitaria.

Pues bien, esta Sala del Tribunal está de acuerdo con la decisión de no decretar la mencionada prueba, aunque no por las razones señaladas por la a quo, toda vez que, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en especial en sentencia SL2082-2022, señaló que, si bien la prueba que podría considerarse como idónea para determinar la pérdida de capacidad laboral son los dictámenes emitidos por las entidades facultadas para ello, no se puede desconocer que el juez puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba. Al respecto dijo la corporación:

“Con fundamento en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, la prueba idónea para determinar el grado de invalidez y el origen de las contingencias de una persona corresponde, en primera oportunidad, al otrora Instituto de Seguros Sociales, a Colpensiones, a las Administradoras de Riesgos Laborales, a las compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las Empresas Promotoras de Salud, con la posibilidad de que en caso de desacuerdo acudan a las juntas de calificación de invalidez.

Por otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que aun cuando la prueba idónea para determinar el estado y porcentaje de pérdida de capacidad laboral de una persona es el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez, así como, por los organismos arriba citados, a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 27 jun. 2002. Rad. 17999, CSJ SL, 29 jun. 2003, rad. 20558, CSJ SL 24 sep. 2003, rad. 21113), también ha reconocido que el juez puede formar su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, sin que la circunstancia de que acuda a unos medios de convicción con preferencia sobre otros, pueda considerarse como un yerro de apreciación, pues así lo reconoce el principio de libertad probatoria previsto en el artículo 61 del CPTSS.”

Descendiendo al caso concreto, la prueba solicitada por la demandante y que no fuera decretada por el juzgado de instancia no es útil para este proceso, debido a que en la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social también se decretó una prueba que busca lo mismo, esto es, con el dictamen decretado a cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia también se busca demostrar si la demandante es considerada o no persona inválida, fecha de estructuración y origen de la enfermedad. Asimismo, las partes contarán con la posibilidad de controvertir tal prueba, garantizándose con ello su derecho de defensa y debido proceso.

La juez, como directora del proceso, decretó las pruebas que consideró conducentes, pertinentes y útiles, por lo que consideró que el dictamen a

cargo de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia puede esclarecer este asunto, sin que sea necesario o útil decretar múltiples dictámenes.

Corolario de todo lo dicho, el auto recurrido por vía de apelación merece ser **CONFIRMADO**, aunque por razones distintas.

Con los argumentos anteriores, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por Colpensiones.

Atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por la demandante, las costas procesales de la segunda instancia son de su cargo y en favor de Colpensiones. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$580.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 082 del 16 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>